

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE  
BOGOTÁ D.C.**

**ACCIÓN DE TUTELA**

**RADICADO: 11001-41-05-008-2022-00545-00**

**ACCIONANTE: ALMA FINANCIERA S.A.S.**

**ACCIONADO: I.E. INTER ELECTRICA S.A.S.**

**SENTENCIA**

En Bogotá D.C. al primer (01) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), procede este Despacho judicial a decidir la Acción de Tutela impetrada por **ALMA FINANCIERA S.A.S.**, quien solicita el amparo del derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por la sociedad **I.E. INTER ELÉCTRICA S.A.S.**

**RESEÑA FÁCTICA**

Manifiesta la sociedad accionante, que el 29 de noviembre de 2021 fue aprobado un crédito bajo la modalidad de libranza a David Stiven Buitrago Yate, para que fuera descontado de su nómina como trabajador de **I.E. INTER ELECTRICA S.A.S.**

Que el 21 de junio de 2022 remitió un derecho de petición a la accionada solicitando se procediera a realizar los descuentos por libranza a David Stiven Buitrago Yate.

Que a la fecha la accionada no ha dado respuesta a su petición.

Por lo anterior, solicita se tutele el derecho fundamental de petición y, en consecuencia, se ordene a **I.E. INTER ELECTRICA S.A.S.** emitir una respuesta de fondo al derecho de petición.

**CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA**

**I.E. INTER ELECTRICA S.A.S.:**

La accionada allegó contestación el día 18 de julio de 2022, en la que manifiesta que David Stiven Buitrago Yate no labora en la empresa desde el 30 de junio de 2022.

Así mismo precisó que, la petición fue recibida directamente por David Stiven Buitrago Yate, quien tenía a su cargo el manejo del correo electrónico: [servicioalcliente@interelectricas.co](mailto:servicioalcliente@interelectricas.co) pero nunca informó sobre la petición ni direccionó la información al área respectiva.

## CONSIDERACIONES

### PROBLEMA JURÍDICO

En concordancia con los hechos que fundamentan la acción de tutela, corresponde al Despacho responder el siguiente problema jurídico: ¿La sociedad **I.E. INTER ELECTRICA S.A.S.** vulneró el derecho fundamental de petición de la sociedad **ALMA FINANCIERA S.A.S.**, al no haberle dado respuesta a su petición de fecha 21 de junio de 2022?

### MARCO NORMATIVO

Conforme el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un instrumento judicial de carácter constitucional, subsidiario, residual y autónomo, dirigido a facilitar y permitir el control de los actos u omisiones de todas las autoridades públicas y excepcionalmente de los particulares cuando éstos vulneren derechos fundamentales.

Esta acción constitucional puede ser interpuesta por cualquier persona a fin de obtener la pronta y efectiva defensa de los derechos fundamentales cuando ello resulte urgente para evitar un perjuicio irremediable, o cuando no exista otro medio de defensa judicial.

### DERECHO DE PETICIÓN

El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.

En desarrollo del Texto Superior, fue expedida la Ley 1755 de 2015 “*Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”, una norma de carácter estatutario, que establece la regulación integral de ese derecho fundamental.

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional se ha referido al derecho de petición, precisando que su contenido esencial comprende: (i) la posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados y excluyendo fórmulas evasivas o elusivas<sup>1</sup>.

Asimismo, la Corte Constitucional<sup>2</sup> ha señalado que el ejercicio del derecho de petición en Colombia está regido por las siguientes reglas y elementos de aplicación:

*“1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.*

*2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política.*

*3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser **oportuna**, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe **resolver de fondo** el asunto solicitado. Además de ello, debe ser **clara, precisa y congruente** con lo solicitado; y (iii) debe ser **puesta en conocimiento** del peticionario.*

*4) La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita.*

*5) El derecho de petición fue inicialmente dispuesto para las actuaciones ante las autoridades públicas, pero la Constitución de 1991 lo extendió a las organizaciones privadas y en general, a los particulares.*

*6) Durante la vigencia del Decreto 01 de 1984 el término para resolver las peticiones formuladas fue el señalado por el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que señalaba un término de quince (15) días para resolver, y en los casos en que no pudiere darse la respuesta en ese lapso, entonces la autoridad pública debía explicar los motivos de la imposibilidad, señalando además el término en el que sería dada la contestación.*

*7) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. En sentido concurrente, el silencio administrativo es prueba de la violación del derecho de petición.*

*8) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea el derecho de petición no la exonera del deber de responder.*

*9) La presentación de una petición hace surgir en la entidad, la obligación de notificar la respuesta al interesado”.*

<sup>1</sup> Sentencia T-251 de 2008. Citada en las Sentencias T-487 de 2017 y T-077 de 2018.

<sup>2</sup> Sentencias T-296 de 1997, T-150 de 1998, SU-166 de 1999, T- 219 de 2001, T-249 de 2001 T-1009 de 2001, T-1160 A de 2001, T-1089 de 2001, SU-975 de 2003, T-455 de 2014.

Así entonces, la efectividad y el respeto por el derecho de petición, se encuentran subordinados a que la autoridad o el particular, según se trate, emitan una respuesta de fondo, clara, congruente, oportuna y con una notificación eficaz.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho de petición supone un resultado que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución de la petición. Sin embargo, se debe aclarar, que el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa<sup>3</sup>.

En síntesis, la garantía real al derecho de petición radica en cabeza de la administración o del particular una responsabilidad especial, sujeta a cada uno de los elementos que informan su núcleo esencial. La obligación no cesa con la simple resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto; que esté dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real, una contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información.

Es importante señalar, que el artículo 5° del Decreto 491 de 2020, amplió los términos para resolver los derechos de petición, pasando de 15 a 30 días hábiles mientras dure el Estado de Emergencia Sanitaria.

La Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de esta norma en la Sentencia C-242 de 2020, declarándola exequible de forma condicionada, bajo el entendido de que la ampliación de términos para solucionar las peticiones no solo es aplicable a las autoridades públicas, sino que también se hace extensible a los particulares.

Valga señalar, que si bien la Ley 2207 del 17 de mayo de 2022 derogó el artículo 5° del Decreto 491 de 2020, en criterio del Despacho esta última norma debe seguirse aplicando a las peticiones que se hayan radicado durante su vigencia; es decir, que los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 se reestablecerán, pero únicamente para las peticiones radicadas a partir del 18 de mayo de 2022.

---

3 Sentencia T-146 de 2012.

## CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO

En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela, en principio, *“pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”*<sup>4</sup>. En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz<sup>5</sup>.

En efecto, si lo que el amparo constitucional busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y *“previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”*<sup>6</sup>. En otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela.

En ese orden, la Corte Constitucional ha desarrollado la teoría de la carencia actual de objeto como una alternativa para que los pronunciamientos no se tornen inocuos, y ha aclarado que el fenómeno se produce cuando ocurren dos situaciones específicas: (i) el hecho superado y (ii) el daño consumado.

Con relación a la categoría de carencia actual de objeto por hecho superado, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 lo reglamenta en los siguientes términos: *“Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”*.

La Corte Constitucional ha interpretado la disposición precitada en el sentido de que la carencia actual de objeto por hecho superado, tiene lugar cuando desaparece la afectación al derecho fundamental invocado<sup>7</sup>. En efecto, si la acción de tutela es el mecanismo eficaz para la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, cuando la perturbación que dio origen a la acción desaparece o es superada, el peticionario carece de interés jurídico ya que dejan de existir el sentido y objeto del amparo.

---

<sup>4</sup> Sentencia T-970 de 2014.

<sup>5</sup> Sentencias T-588A de 2014, T-653 de 2013, T-856 de 2012, T-905 de 2011, T-622 de 2010, T-634 de 2009, T-449 de 2008, T-267 de 2008, T-167 de 2008, T-856 de 2007 y T-253 de 2004.

<sup>6</sup> Sentencia T-168 de 2008.

<sup>7</sup> Sentencias T-267 de 2008, T-576 de 2008, T-091 de 2009, T-927 de 2013, T-098 de 2016, T-378 de 2016 y T-218 de 2017.

Luego, al desaparecer el hecho o los hechos que presuntamente amenazan o vulneran los derechos de un ciudadano, carece de sentido que el juez profiera órdenes que no conducen a la protección de los derechos de las personas. Así, cuando el hecho vulnerador desaparece se extingue el objeto actual del pronunciamiento, haciendo inocuo un fallo de fondo<sup>8</sup>.

En síntesis, el hecho superado significa la observancia de las pretensiones del actor a partir de una conducta desplegada por el transgresor. En otras palabras, la omisión o acción reprochada por el accionante, ya fue superada por parte del accionado.

Cuando se presenta ese fenómeno, la obligación del juez de tutela no es la de pronunciarse de fondo, solo cuando estime necesario *“hacer observaciones sobre los hechos que originaron la acción de tutela, con el propósito de resaltar su falta de conformidad constitucional, condenar su ocurrencia y conminar a que se adopten las medidas necesarias para evitar su repetición, so pena de las sanciones pertinentes<sup>9</sup>. De cualquier modo, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que en la sentencia se demuestre la reparación del derecho antes de la aprobación del fallo, es decir, que se demuestre el hecho superado<sup>10</sup><sup>11</sup>.*

### CASO CONCRETO

Partiendo de las consideraciones expuestas y de la documental allegada, observa el Despacho que la sociedad **ALMA FINANCIERA S.A.S.** presentó un derecho de petición ante la sociedad **I.E. INTER ELECTRICA S.A.S.**, en el cual solicitó lo siguiente:

*“Solicitamos que a partir del próximo pago de nómina y de acuerdo con la autorización expresa e irrevocable firmada por EL TRABAJADOR, que se adjunta, se le empiecen a hacer descuentos por nómina de las cuotas pendientes de pago, las cuales relaciono a continuación:*

*Cuotas pendientes de pago: SEIS (06) cuotas mensuales.*

*Valor cada cuota: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$133,716).*

*2. Dichos descuentos deberán ser consignados en la cuenta de ahorro No. 01-017-007-239-0 del Banco Davivienda a nombre de ALMA Financiera S.A.S. Nit. 901.168.372-5. (se adjunta certificación bancaria respectiva).*

*3. Que los descuentos y pagos reseñados en el numeral primero de este capítulo se hagan en un plazo no mayor a 05 días hábiles siguientes al envío de la presente comunicación, so pena de acudir a la justicia ordinaria e interponer quejas ante la entidades administrativas y judiciales que supervisan el cumplimiento de las exhortaciones legales.”<sup>12</sup>*

<sup>8</sup> Sentencia T-070 de 2018.

<sup>9</sup> Sentencia T-890 de 2013.

<sup>10</sup> Sentencias SU-225 de 2013, T-856 de 2012, T-035 de 2011, T-1027 de 2010, T-170 de 2009 y T-515 de 2007.

<sup>11</sup> Sentencia T-970 de 2014.

<sup>12</sup> Página 7 del archivo pdf “001.AcciónTutela”

La petición fue radicada el día 21 de junio de 2022, en los correos electrónicos: [rhumanos@interelectricas.co](mailto:rhumanos@interelectricas.co) y [servicioalcliente@interelectricas.co](mailto:servicioalcliente@interelectricas.co)<sup>13</sup>

La sociedad **I.E. INTER ELECTRICA S.A.S.**, al momento de dar contestación a la acción de tutela, informó que DAVID STIVEN BUITRAGO YATE ya no laboraba en la empresa por cuanto había terminado su contrato de trabajo el 30 de junio de 2022<sup>14</sup>.

En sustento, allegó copia de la carta de autorización para el examen médico de egreso del 30 de junio de 2022, copia de la certificación de inicio y finalización del contrato de trabajo y, por último, copia de la liquidación definitiva de prestaciones sociales.<sup>15</sup>

Así mismo, precisó que no había suministrado respuesta a la petición por cuanto había sido recibida directamente por DAVID STIVEN BUITRAGO YATE, quien se encontraba a cargo del correo electrónico: [servicioalcliente@interelectricas.co](mailto:servicioalcliente@interelectricas.co) y, quien no informó sobre la petición ni la direccionó al área correspondiente.<sup>16</sup>

La contestación, que fue radicada ante el Juzgado por parte de la sociedad **I.E. INTER ELECTRICA S.A.S.**, también fue copiada a la sociedad **ALMA FINANCIERA S.A.S.** a los correos electrónicos: [camilomaya@almafianciera.com](mailto:camilomaya@almafianciera.com) y [almafiancierasas@gmail.com](mailto:almafiancierasas@gmail.com)<sup>17</sup>.

Con base en lo anterior, el Despacho procede a analizar si la respuesta cumple los requisitos señalados por la jurisprudencia constitucional para considerar satisfecho el derecho de petición.

En primer lugar, respecto de la **notificación** de la respuesta, se tiene que fue enviada a los correos electrónicos: [camiloamaya@almafianciera.com](mailto:camiloamaya@almafianciera.com) y [almafiancierasas@gmail.com](mailto:almafiancierasas@gmail.com)<sup>18</sup>, el primero, autorizado como canal de notificación en la acción de tutela y, el segundo, registrado como correo electrónico de notificaciones judiciales en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad **ALMA FINANCIERA S.A.S.**<sup>19</sup>

En segundo lugar, respecto de la **oportunidad** de la respuesta, se tiene que, aunque no se generó dentro del término de 15 días hábiles previsto en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1º de la 1755 de 2015 (ya vigente para el momento en que se radicó la petición), fue emitida y notificada durante el transcurso de esta acción de tutela.

---

<sup>13</sup> Página 3 ibídem

<sup>14</sup> Página 1 del archivo pdf "007. ContestaciónAccionada"

<sup>15</sup> Páginas 4 a 6 Ibídem

<sup>16</sup> Página 1 Ibídem

<sup>17</sup> Página 1 Ibídem

<sup>18</sup> Página 1 Ibídem

<sup>19</sup> Archivo pdf "003. ConsultaRUESAccionante"

Ahora bien, respecto del tercer requisito relativo a resolver de **fondo** lo peticionado, se tiene que la respuesta fue clara y congruente con lo solicitado, toda vez que en la petición la accionante solicitó se realizaran los descuentos de nómina a DAVID STIVEN BUITRAGO YATE, por concepto de libranza; frente a ello, la accionada informó que el trabajador ya no laboraba en la empresa<sup>20</sup>, por lo tanto, no existen valores sobre los cuales se pueda realizar descuento alguno por concepto de libranza.

En este punto es menester recordar, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, que el derecho fundamental de petición se satisface con una respuesta oportuna, concreta, clara y congruente, lo que no equivale a sostener que la misma deba acceder favorablemente a lo solicitado, pues lo que se exige es que su contenido cumpla los requisitos mencionados, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo<sup>21</sup>.

Por lo tanto, el hecho de que la respuesta no colme el interés del peticionario no afecta el derecho fundamental de petición, pues su núcleo esencial no se contrae a que se otorgue una respuesta que acoja los pedimentos formulados, sino a que se otorgue una respuesta que resuelva de fondo el asunto solicitado. Si la respuesta no accede a las pretensiones, es un asunto ajeno a la acción de tutela que deberá resolverse a través de los mecanismos ordinarios.

Por lo anterior, considera el Despacho que la respuesta brindada por la sociedad **I.E. INTER ELECTRICAS S.A.S.** al derecho de petición presentado por la sociedad **ALMA FINANCIERA S.A.S.**, cumple los requisitos señalados por la jurisprudencia constitucional para tener por satisfecha esa garantía *iusfundamental*, pues atendió de fondo el asunto y además fue debidamente notificada.

En consecuencia, lo que era objeto de vulneración del derecho fundamental de petición fue superado, y, por tanto, pierde efecto la presente acción por lo que deberá declararse el **hecho superado**.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley:

## RESUELVE

---

<sup>20</sup> Página 7 del archivo pdf "007. ContestaciónAccionada"  
<sup>21</sup> Sentencia T-077 de 2018, T-487 de 2017, T-455 de 2014, entre otras.

**PRIMERO: DECLARAR** la carencia actual de objeto por **HECHO SUPERADO**, dentro de la acción de tutela de **ALMA FINANCIERA S.A.S.** en contra de **I.E. INTER ELECTRICAS S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

**SEGUNDO:** Notifíquese a las partes por el medio más eficaz y expedito, advirtiéndoles que cuentan con el término de tres (3) días hábiles para impugnar esta providencia, contados a partir del día siguiente de su notificación.

Por motivos de salud pública, y en acatamiento de las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, la impugnación deberá ser remitida al email: [j08lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j08lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**TERCERO:** En caso que la presente sentencia no sea impugnada, por Secretaría remítase el expediente a la Corte Constitucional para que surta el trámite eventual de revisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

  
DIANA FERNANDA ERASSO FUERTES  
JUEZ